

LA CRISIS DE ECUADOR, MUCHO MÁS QUE SEGURIDAD

Anna Ayuso, investigadora sénior, CIDOB



La crisis que enfrenta el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tan solo dos meses después del inicio de su mandato, ha vuelto a poner al país andino en el punto de mira. Las bandas criminales han declarado la guerra al Estado desatando la violencia y amotinándose en las cárceles. La respuesta del gobierno ha sido sacar al ejército a las calles. Para ello, ha contado con el apoyo de todas las fuerzas políticas y la aprobación de la mayoría de la población, pero los riesgos a los que se enfrenta el país van más allá de los brotes de violencia.

788

ENERO
2024

Este artículo se publicó previamente en *La Vanguardia*.

El asesinato del candidato Fernando Villavicencio por parte de sicarios del crimen organizado durante la campaña presidencial encendió las luces de alarma, y la seguridad se convirtió en un tema central del debate electoral. Las promesas de “mano dura” fueron parte esencial del programa de Noboa, con el referente de la gestión del problema de las maras de Nayib Bukele en El Salvador. Una buena parte de la población ecuatoriana es receptiva a ese discurso de respuestas contundentes, aun a costa de la pérdida de derechos y libertades.

Pero, ¿cómo ha pasado Ecuador de ser un país con bajas tasas de delincuencia a ser el país con mayor número de homicidios de la región en apenas dos décadas? Los factores son tanto endógenos como externos. El final de la era de la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), una etapa próspera en sus inicios, coincidió con la crisis económica y dejó al país sumido en una polarización política que debilitó las estructuras institucionales. Los posteriores gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso dedicaron más tiempo a mantenerse vivos políticamente que a desarrollar las respuestas necesarias para hacer frente a los problemas estructurales del país. Las medidas económicas del primero levantaron protestas de ámbito nacional, que llevaron a la intervención militar y a la declaración del estado de excepción en 2019. Su sucesor, Guillermo Lasso, gobernó en minoría con una oposición férrea que acabó forzando su dimisión. En su debilidad para enfrentar la violencia de las bandas recurrió repetidamente al estado de excepción, sin que eso tuviera ningún efecto.

La erosión institucional no solo ha afectado al gobierno, también a los cuerpos de seguridad, las instituciones penitenciarias y el sistema judicial, lo que permitió la penetración del crimen organizado a través de la corrupción. La consecuencia fue la impunidad y el desarrollo de una estructura paralela al Estado que tiene el control territorial sobre las rutas del crimen organizado, sobre todo en zonas fronterizas, pero también en zonas urbanas y en los establecimientos penitenciarios. La corrupción no solo afecta al sector público, también se ha infiltrado en el sector privado diversificando el negocio de la delincuencia transnacional.

Pero la escalada exponencial de la violencia se explica, sobre todo, por la internacionalización de las redes criminales. La presión contra las bandas en países vecinos hizo que buscaran vías alternativas, y Ecuador pasó de ser territorio de tránsito a centro de producción y distribución de pasta de coca con destino a Estados Unidos, México, Europa y Brasil. El puerto de Guayaquil es el centro neurálgico de ese narcotráfico. La internacionalización de las bandas locales, con vínculos con los carteles mexicanos, brasileños y colombianos, ha llevado a una escalada de la rivalidad y al enfrentamiento entre bandas, con extorsión, asesinatos, sicariato y secuestros. El proceso de Paz en Colombia y el desmembramiento de las FARC hizo que algunos de los integrantes desmovilizados pasaran a incorporarse a las bandas criminales en Ecuador.

La escalada exponencial de la violencia se explica, sobre todo, por la internacionalización de las redes criminales. La presión contra las bandas en países vecinos hizo que buscaran vías alternativas, y Ecuador pasó de ser territorio de tránsito a centro de producción y distribución de pasta de coca con destino a Estados Unidos, México, Europa y Brasil.

Sin embargo, la pretensión de romper esta red de violencia solo con políticas de mano dura se ha mostrado vana ya en otros países como México. Puede haber una pacificación temporal pero el crimen transnacional requiere de pactos de Estado transversales y cooperación internacional. Algo que va mucho más allá de la seguridad. Es necesario revisar las estructuras que sostienen estas redes de delincuencia transnacional, y huir del espejismo populista de soluciones simples a problemas complejos.